

El Salvador en 1998

En el año de 1998 se fraguaron graves y preocupantes dinamiismos económicos, políticos y sociales, los cuales han sembrado serias dudas acerca del rumbo actual del proceso de instauración democrática en El Salvador. En materia económica, el deterioro del agro continuó indetenible, sin que las instancias estatales dieran señales de hacerse cargo de un problema que amenaza la viabilidad socioeconómica del país. La tormenta tropical "Mitch" puso de manifiesto, dramáticamente, la vulnerabilidad de la población rural, cuyo espacio vital ha sido destruido por prácticas depredatorias del más diverso signo. En 1998 no se hizo nada para recuperar al sector agrícola; más bien, la desatención gubernamental fue la norma, con lo cual se perdió una nueva oportunidad de sentar las bases para un proceso autosostenido de desarrollo económico y social. No se entendió —o no quiso entenderse— que la viabilidad de El Salvador es imposible sin un agro con bases sólidas en los planos financiero y medioambiental.

La apuesta económica continuó por la vía del fomento de la terciarización, específicamente por la expansión del sector financiero. A los intereses de este sector no ha sido ajena la privatización de la energía eléctrica, las telecomunicaciones y las pensiones de retiro, rubros que se han convertido en espacio de disputa para grupos financieros nacionales e internacionales, que no han vacilado en utilizar las más diversas artimañas para sacar el mejor provecho del público que hace uso de los servicios privatizados. La administración de Armando Calderón Sol ha apoyado incondicionalmente a los grupos financieros más fuertes del país, de modo que saquen las mayores ventajas en la competencia por hacerse de aquellas empresas públicas más rentables. Incluso, este compromiso del gobierno de Calderón Sol con determinados grupos económicos ha dado lugar a que se caracterice la relación entre ambos como una relación de tipo "mercantilista".

Como consecuencia de lo anterior, el país no ha podido superar sus más agudos desequilibrios estructurales, sino que más bien los ha profundizado. La pobreza rural y urbana, el desempleo, la marginación sociocultural y la insatisfacción de las necesidades básicas de la mayor parte de la población han aumentado. El deterioro galopante del sector agropecuario y el impacto de los procesos de privatización no sólo han agravado los viejos problemas estructurales del país, sino que han añadido nuevos obstáculos para que los mismos puedan ser resueltos.

En materia política, la clase política no pudo revertir el descrédito que la viene acompañando desde años anteriores. Las resistencias a democratizarse y renovarse, la incompetencia, las pugnas de poder... Todo ello contribuyó a la deslegitimación de los partidos y sus líderes, haciéndolos poco creíbles ante la sociedad. Un año más, la clase política puso de manifiesto su incapacidad para hacer de intermediaria entre las demandas de la sociedad y las instancias estatales responsables de darles respuesta. Al ser 1998 un año preelectoral, las disputas de poder ocuparon las energías de las cúpulas partidarias, cuyos miembros más ambiciosos no titubearon en usar cuantos medios estuvieran a su favor para derrotar a sus rivales políticos. Así, en la mayor parte de partidos se impusieron no las figuras más capaces, sino las que hicieron las jugadas más audaces. Cuando ya todas las candidaturas están definidas, inocultable es la pobreza política de El Salvador. El espectro de candidatos de entre los cuales se elegirá al Presidente de la República no ofrece alternativas que en verdad puedan generar confianza acerca del futuro de la democracia en nuestro país. Incluso, lo que va de la campaña política se diferencia poco de las campañas políticas tradicionales, en las que lo que ha predominando es la retórica barata y las promesas vacías.

La dinámica política en 1998 ha sido, pues, preocupante. Ha transcurrido un año más sin que los partidos políticos se hayan institucionalizado y democratizado. Han seguido pesando las decisiones y los intereses de camarillas que consideran a los partidos su propiedad exclusiva. Mientras tanto, la población ha disminuido aún más los escasos niveles de confianza que tenía en el sistema político. El divorcio entre la clase política y la sociedad se ha profundizado, y todo apunta a que en 1999 esta tendencia continuará acentuándose.

En materia social, 1998 vio agravarse las condiciones de vida de los sectores mayoritarios de la población. A las dificultades de sobrevivencia generadas por la pobreza en todas sus manifestaciones, se sumó la criminalidad común y organizada, la cual, como en años anteriores, trajo sufrimiento y pérdidas materiales a la población. Ante ambas situaciones, las autoridades gubernamentales no dieron muestras de tomarse en serio problemas tan graves para el país. El gobierno de Calderón Sol llegó a su último año sin cumplir el compromiso tantas veces proclamado —un compromiso anunciado en el plan de gobierno y en infinidad de discursos presidenciales— de combatir la pobreza. Calderón Sol deja a los

“más pobres de los pobres” siendo los mismos pobres de siempre; El Salvador, lejos de ser un “país de propietarios”, se ha convertido en un país que es propiedad de poderosas corporaciones financieras, a favor de cuyos intereses trabajó tesoneramente el gobierno.

La violencia criminal, por otra parte, no ha sido combatida con suficiente determinación y eficacia. Más aún, el país atraviesa por una crisis de la seguridad pública motivada tanto por el fracaso de la Policía Nacional Civil (PNC) para hacer frente a la criminalidad —que incluso se ha incrustado en las estructuras policiales—, como por las ataduras políticas del Ministerio de Seguridad Pública, las cuales han impedido a este ministerio asumir con la debida seriedad el problema de la violencia criminal.

No hay que pasar por alto el señalamiento del fracaso de las autoridades en la preservación de la seguridad pública. En efecto, en este año se han hecho patentes las graves limitaciones de las que adolecen instituciones cuya responsabilidad directa es la seguridad de la ciudadanía. Una de las instituciones que no puede dejar de mencionarse es la Policía Nacional Civil (PNC), la cual no ha asumido, en muchos momentos, el papel que le corresponde en la sociedad salvadoreña actual. Algunos de los males que han empañado su desempeño en 1998 son los siguientes: (a) presencia de efectivos policiales —agentes y mandos medios— vinculados al mundo del crimen; (b) complicidad con actividades criminales de diverso signo; (c) conflicto irresuelto entre los mandos superiores y los de la Academia Nacional de Seguridad Pública; (d) mala coordinación entre la jefatura policial y el Ministerio de Seguridad Pública; (e) predominio de las decisiones de carácter político sobre las de carácter estrictamente policial; y (f) negligencia y resistencia al cambio institucional por parte de un sector importante del organismo policial.

El conjunto de esos factores ha entrampado el trabajo de la Policía Nacional Civil, dando lugar a una sensación de fracaso en el combate contra la criminalidad. La Policía no ha estado a la altura de las necesidades de seguridad pública que tiene la sociedad. Ha mostrado, en incontables oportunidades, profundas debilidades logísticas y estratégicas. Eso la ha desacreditado ante la población, que no logra ver los frutos de una inversión de seis años. El descrédito policial se hace más manifiesto cuando agentes y mandos medios aparecen vinculados a homicidios, secuestros o robos. Por las razones anteriores, en el mejor de los casos, la Policía Nacional Civil ha terminado siendo vista como una institución que no sirve para mucho; en el peor de los casos, ha comenzado a ser vista como una amenaza. Ambas situaciones apuntan a algo grave: la crisis de una institución llamada a desempeñar un rol decisivo en la democratización de El Salvador.

En resumen, 1998 no fue un año fructífero para la instauración democrática en El Salvador. Las resistencias de la clase política a la renovación interna, los

efectos sociales de un proceso de privatización fraguado en función de determinados grupos de poder, el deterioro medioambiental, la presencia de grupos criminales en el seno de la Policía Nacional Civil... Todo ello socavó los esfuerzos por construir una sociedad democrática en El Salvador. Lo más preocupante es que nada indica que en 1999 esos dinamismos van a ser erradicados. Las mismas figuras y partidos seguirán regentando la política, los mismos intereses empresariales continuarán disputándose lo que queda del país y, al parecer, el mismo partido controlará el ejecutivo por un quinquenio más. Hay suficientes razones para no alegrarse por el futuro de El Salvador. Un cambio sustantivo en el modo de hacer política, de asumir los retos empresariales y de orientar los esfuerzos estatales no se vislumbra en el horizonte. Quizás habrá que esperar a dos o tres generaciones nuevas de salvadoreños para que los vicios y limitaciones de las que actualmente dirigen los destinos del país puedan ser superadas. Mientras tanto, no queda más que buscar, entre lo peor, lo mejor.

